

*BEST COPY*  
*Available*  
*THROUGHOUT*  
*FOLDER*

6/24/98

FORM NO. 51-61  
1949

CLASSIFICATION **CONFIDENTIAL**

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

**INFORMATION REPORT**

**CIA 10** 142.

REPORT NO. [REDACTED]

25X1A

CD NO.

DATE DISTR. 11 May 1951

NO. OF PAGES 1

NO. OF ENCLS. 3  
(LISTED BELOW)

SUPPLEMENT TO  
REPORT NO.

COUNTRY **Venezuela**

SUBJECT **Labor Reaction to Decree Ending  
Oil Industry Dispute**

PLACE 25X1A  
ACQUIRED [REDACTED]

DATE OF  
ACQUIRED [REDACTED]

25X1X

1. There are attached for your information the following documents:

- a. Copy of Manifiesto de los Trabajadores Petroleros al Pueblo de Venezuela, which was distributed in Caracas on 20 April 1951.

- c. Copy of undated manifesto signed by the Regional Committee of the PCV, Federal District, which was circulated in Caracas on 17 April 1951.

2. The attached documents are for your retention.

Attachments: 1. "Manifiesto de los Trabajadores Petroleros al Pueblo de Venezuela", 8 pages.

3. Undated manifesto, 1 page.

25X1X



25X1A

25X1A

Approved For Release 2002/01/18 : CIA-RDP83-00415R008000050001-6

Approved For Release 2002/01/18 : CIA-RDP83-00415R008000050001-6

# MANIFIESTO

## de los Trabajadores Petroleros al Pueblo de Venezuela



Ante la situación creada por el Decreto dictado por el Ejecutivo Federal con fecha 9 de abril, que pone fin al proceso de discusión de un nuevo contrato colectivo de trabajo en la industria del petróleo, es nuestro deber hacer a los Obreros y Empleados Petroleros y al Pueblo de Venezuela la siguiente exposición:

### Origen y desarrollo del Comité Unificado.—

Habiendo venido en febrero y marzo del corriente año los contratos colectivos celebrados, hace tres años, entre la Fedepetrol y las empresas petroleras, los obreros y empleados de dicha industria iniciaron en las diversas regiones del País las gestiones conducentes a la presentación de nuevos proyectos de contratos, los cuales fueron introducidos por ante las respectivas Inspectorías del Trabajo. Mas, ante la situación creada por la diversidad de proyectos presentados, los Trabajadores Petroleros, representados en los diversos Comités, grupos y sectores sindicales, comprendieron que sólo con la centralización de las discusiones en Caracas y con la constitución de un organismo representativo, podría operarse un cambio en la actitud intransigente de las Compañías. En tal sentido, los trabajadores procedieron a la constitución del Comité de Trabajadores Petroleros Pro-Contrato Único y, obtenido el reconocimiento legal de sus actividades y alcanzada la centralización de las discusiones en esta ciudad, introdujeron por su mediación el proyecto de contrato que uniforma y compendia, en sus cláusulas, las reivindicaciones pedidas por los diversos sectores.

Al redactor dicho Proyecto, los miembros del Comité tuvieron en consideración los siguientes factores: a) La práctica, universalmente admitida por la doctrina y la Jurisprudencia, de que las disposiciones generales y abstractas de la Ley del Trabajo y de su Reglamento sean adaptadas, mediante contratos colectivos, a las condiciones de trabajo específicas de cada industria; b) El nuevo contrato colectivo debía ampliar las reivindicaciones y mejoras obtenidas en la Convención suscrita en 1948, en virtud de la evolución en las relaciones de trabajo y en atención al

necen ajenas las partes contratantes e interesadas. Por lo demás, el procedimiento adoptado por el Ejecutivo está reñido con las disposiciones expresas del título VIII de la Ley del Trabajo cuyo espíritu es el de garantizar a las partes la solución de sus conflictos por la vías fijadas en el mismo ordenamiento positivo. Es de observar que la intervención ejecutiva mediante decreto se admite en la Ley del Trabajo únicamente cuando se han llenado las siguientes condiciones: a) En caso de existir una huelga declarada y en curso y b) Cuando los servicios paralizados por la huelga pongan en peligro la salud o la vida económico-social de la Nación. De estas dos condiciones se desprende que el espíritu claro y expreso de la ley, es pues, el de permitir a las partes la libre resolución de sus conflictos limitando, hasta los últimos extremos, la intervención ejecutiva.

El Decreto fué dictado extemporáneamente sin haber llegado las partes al proceso conflictivo y sin haberse asomado siquiera la posibilidad de arribar a un acuerdo por medio del arbitraje. En consecuencia, el referido decreto rompe abiertamente el desenvolvimiento jurídico de las instituciones laborales venezolanas.

#### Examen de las bases del Decreto.—

Acerca del régimen de salarios consagrados en el Decreto se observa: que los aumentos establecidos no guardan relación con las fabulosas ganancias percibidas por las empresas en los últimos años, como consecuencia del aumento de la producción, ni toma en cuenta el importante factor del alza vertiginosa del costo de la vida. El Gobierno parece que se dejó sorprender por aquella falsa estimación hecha por las Compañías en su remitido a la prensa, donde asientan que el costo adicional para la industria petrolera en el año de 1951 significaría un aumento no menor de unos tres mil millones de bolívares, con probabilidad de llegar hasta cuatro mil millones. Durante la vigencia del contrato anterior, las empresas tenían aproximadamente cincuenta mil trabajadores, quienes percibieron en 1948 por concepto de sueldos y salarios la suma de Bs. 492.622.166,47, más lo percibido por concepto de prestaciones sociales que daba un total de Bs. 188.781.095,53. O sea, que las Compañías gastaron en un año de vigencia del contrato anterior, como paga de sus trabajadores en Venezuela, una suma global de Bs. 681.403.262. Es conveniente advertir que estas cifras, arrojadas por la estadística oficial para 1948, descendieron verticalmente por los miles de despidos ocurridos en los campos petroleros en los últimos años, y por la progresiva tecnificación del sistema de explotación petrolera.

Los trabajadores sólo pidieron un aumento general de cinco bolívares en el salario básico. Tomando las cifras del año máximo de empleo —1948— como si fueran las actuales, lo cual no es cierto por los despidos habidos, tendríamos que las compañías habrían tenido que hacer un desembolso adicional de Bs. 106.615.850 por aumento de salarios. Admitamos, por otra parte, lo que tampoco es cierto, que nosotros pedíamos que todas las prestaciones sociales se duplicaran. Tendríamos entonces, tomando como base el gasto correspondiente al año máximo de empleo, que las empresas tendrían que hacer un desembolso adicional por concepto de prestaciones de Bs. 188.781.095,53. Con base en las propias cifras de las compañías tendríamos que todo el aumento que el proyecto redactado por el Comité suponía, llevándolo al máximo, era de Bs. 295.393.945,53. Como podrá verse, nuestras aspiraciones en cuanto a salarios y prestaciones sociales eran razonables y completamente dignas.

crecido aumento de las utilidades de las Compañías, lo cual no se compadece con la situación económico-social de los Trabajadores; y c) El nuevo contrato colectivo debía ser un cuerpo de normas técnicas y jurídicas fruto del estudio de la realidad económica y social que impera en la industria petrolera, así como del examen de las perspectivas que el mercado internacional del petróleo ofrece hoy a los empresarios por sus condiciones y perspectivas sumamente halagadoras.

Sobre estas bases se elaboró el proyecto de contrato con el voto unánime de todos los sectores de trabajadores representados en el Comité y con la fervorosa aceptación de los cuarenta mil obreros y empleados petroleros.

#### La actitud de las partes en las discusiones.—

Desde el primer momento de las discusiones celebradas en el Ministerio del Trabajo se puso de relieve la situación siguiente: por un lado, las Compañías aferradas a actitudes de marcada intransigencia, boicoteando la discusión del proyecto con mociones dilatorias y negando de plano las más simples y elementales cláusulas del contrato; y, por el otro lado, los delegados de los trabajadores, agotando todas las fórmulas conciliatorias con objeto de llegar a un avenimiento entre las partes. ¿Cuál fué la posición de las empresas? Primitivamente, propusieron que la discusión se iniciara con base en el contrato anterior, alegando que estaban acostumbradas a su manejo y que las partes poseían experiencia al respecto. Tal moción, formulada con carácter previo, fué unánimemente rechazada por el Comité, cuyos personeros, apoyados en las disposiciones legales y jurisprudenciales, insistieron en la discusión del nuevo proyecto de contrato colectivo. En tal debate, la parte trabajadora demostró la justeza de su posición e hizo hincapié en que el pasado contrato resulta anacrónico e injusto debido a las transformaciones de orden económico y social operadas en la industria del petróleo.

Ante las irrefutables razones, las empresas admitieron, discutir el proyecto, pero en una forma insincera, negando de plano hasta las definiciones preliminares del contrato y obstaculizando la posibilidad de un arreglo amistoso. En esta forma transcurrieron las discusiones hasta la cláusula 6ª del proyecto, y, en vista de que tal sistema de debate no deparaba ningún resultado positivo en las deliberaciones, el representante del Ministerio del Trabajo propuso una tregua de varios días para dar tiempo a las empresas de estudiar nuestro pliego para formular sugerencias concretas al respecto. Vencido este plazo, las Compañías trajeron a la mesa de discusiones su famoso memorandum nº 1, en cuya parte dispositiva, proponían continuar las discusiones sobre estas bases: 1º) Los trabajadores debían renunciar previamente a ciento seis cláusulas del proyecto redactado por el Comité y 2º) Los trabajadores y considerada como factor de provocación y de entorpecimiento en las las 40 cláusulas restantes del proyecto presentado. Esta proposición fué negada por los trabajadores y considerada como factor de provocación y de entorpecimiento en las discusiones. Efectivamente, las empresas no proponían otra cosa con su llamada "moción conciliatoria", sino el archivo definitivo del proyecto nuevo y la eliminación sin discusión previa, de numerosas cláusulas e instituciones fundamentales para los trabajadores, comprendidas entre las 106 normas contractuales que debían renunciarse. En vista de que las empresas no cedían en su posición intransigente y violenta, desconociendo de la Ley, que las obliga a discutir contratos colectivos con

representante del Ministerio del Trabajo —a instancia de la parte trabajadora— formuló una nueva proposición conciliatoria en estos términos: Que las partes discutieran primero las cuarenta cláusulas señaladas por las Compañías, sin perjuicio de avocarse después a la discusión de las otras 106. La parte obrera aceptó, desde luego, esta proposición conciliatoria pero las Compañías se aferraron a su primitiva posición, insistiendo en la reunión definitiva y expresa de las citadas 106 cláusulas, como condición indispensable para seguir discutiendo.

En este estado de las negociaciones, el Ministerio presentó al Comité unas llamadas "bases de discusión" suministradas por las Empresas, sobre puntos que admitían muy exiguas concesiones a los obreros y empleados de la industria del petróleo. Tales proposiciones de las Compañías se reducían a aumentar en dos bolívares los salarios de los trabajadores de la nómina diaria y en un diez por ciento a los de la nómina mensual; y a modificar, de manera precaria e insubstantial las demás prestaciones sociales por concepto de comisariato, asistencia médica y educación. Consideradas tales ofertas por el Comité, fueron rechazadas por todos los sectores en él representados, teniendo en cuenta que más del 90% de las reivindicaciones consagradas en el Proyecto quedaban eliminadas totalmente.

El Comité, ante la gravedad de la situación originada, principalmente, por la actitud desafiante de las Compañías, solicitó una audiencia con carácter urgente, al Presidente de la Junta de Gobierno. Una vez en Miraflores, los dirigentes obreros expresaron a dicho funcionario sus puntos de vista, destacando el ánimo conciliatorio de los trabajadores y su deseo de que fueran reanudadas las discusiones en el Ministerio del Trabajo. El doctor Suárez Flamerich prometió que las discusiones se reanudarían y, el lunes 8 de abril, las partes volvieron a reunirse en presencia de los representantes del Ministerio del Trabajo. En esa sesión, los miembros del Comité, deseosos de llegar a un acuerdo con las Compañías y previendo la intervención oficial que ya se barruntaba en los corrillos callejeros, formularon hasta siete proposiciones encaminadas a ponerle fin conciliatorio al problema planteado, sobre la base de hacer reformas sustanciales a las cláusulas del Proyecto de Contrato presentado. Pero los esfuerzos de los trabajadores resultaron estériles y el representante del Ministerio del Trabajo, actuando con manifiesta precipitación, declaró concluido el proceso de discusiones conciliatorias. Al efecto, hizo levantar un acta que no firmaron los miembros del Comité por considerar que debía dejarse al trato directo entre las partes la solución de la cuestión suscitada. Esa misma noche, el Ejecutivo Federal dictó el Decreto fijando las condiciones de trabajo.

**El Decreto: un procedimiento reñido con la Ley.—**

El Decreto del Ejecutivo Federal poniendo fin a las discusiones conciliatorias que sostenían las empresas con los trabajadores, es, a todas luces, precipitado e impropio. En efecto, al ocurrir la intervención gubernativa, no se habían agotado todavía las posibilidades de llegar a un avenimiento entre las partes; estamos, además, convencidos de que no se utilizaron satisfactoriamente por parte de las Autoridades del Trabajo todos los medios legales, en la discusión del contrato, a fin de evitar la medida extrema y anti-jurídica que se adoptó. Este procedimiento, consagra un funesto precedente en las negociaciones colectivas entre patronos y trabajadores al establecer condiciones de trabajo mediante un Decreto, al cual naturalmente perma-

En los considerandos del mencionado Decreto se expresa que un aumento de salarios afectaría los ingresos fiscales. Sobre ello, creemos necesario observar que, conforme a la mejor doctrina hacendística, la finalidad del Estado no consiste en la simple misión de recaudar el mayor monto posible de impuestos. Su fin es el noble de procurar el mayor bienestar económico y social de los ciudadanos, realizando el Bien Común. Por lo demás, a título informativo, nos permitimos presentar el siguiente cuadro estadístico, en el cual se comparan algunos sueldos asignados en el Presupuesto General de Rentas y Gastos Públicos, de 1948-1949, con los asignados en el Presupuesto vigente de 1950-1951:

Cargo	Sueldo 1948-49	Sueldo 1950-51	Aumento	Porcentaje
Ministro del Trabajo	Bs. 72.000	96.000	24.000	33,33%
Consultor Jurídico	Bs. 31.440	37.680	6.240	19%
Director del Trabajo	Bs. 31.440	37.680	6.240	19%

Igual para los demás Ministros, Consultores Jurídicos, y Directores de Ministerios. De todo lo cual se desprende que el Presupuesto 1950-1951 ha tomado en cuenta, en forma sensible, el alza del costo de la vida y no ha tenido los reparos que ahora demuestra en disminuir los ingresos fiscales. Además, el Decreto establece un aumento del 10% para los trabajadores que devenguen salarios mayores de Bs. 750 mensuales, con un límite máximo de Bs. 200 mensuales. Sin embargo, en el caso de los Ministros del Despacho, que devengaban un sueldo de 6.000,00 para el año 1948-1949, sus sueldos han sido aumentados en la suma de 2.000,00 mensuales. Y los sueldos de los Consultores Jurídicos y Directores de Ministerios, han sido aumentados durante el año 1950-1951, en la suma de Bs. 520,00 mensuales.

Las empresas, en su Memorandum N° 1, afirmaron: "...las ganancias y beneficios sociales que disfruta el trabajador en la industria petrolera de Venezuela pueden compararse favorablemente a los de los trabajadores de la industria en cualquiera otra parte del mundo..." A esta afirmación responde el ciudadano norteamericano Harvey O'Connor, corresponsal de "Oil Workers International Union", en declaraciones suministradas al corresponsal del diario "El Nacional" en la ciudad de Maracaibo, en fecha 23 de marzo del corriente año: "Los obreros deben pedir más a las compañías petroleras, pues los salarios están en alza en los Estados Unidos y los otros países productores petroleros. Venezuela que es el segundo, no debe quedarse atrás. El promedio de salario es de 15 dólares (Bs. 50,25) diarios en los Estados Unidos, en tanto que en Venezuela apenas gana el obrero de 14 a 16 bolívares diarios como mínimo".

Agregó Mr. O'Connor que el costo de la vida en Venezuela es superior en un 50% al de los Estados Unidos. Y esto quiere decir que si un obrero en ese país gana diariamente, por término medio, Bs. 50,25 (15 dólares), el obrero venezolano, para estar igualado al de los Estados Unidos, debería ganar Bs. 75,37 ya que con esa suma es con la que podría adquirir la misma cantidad de artículos en Venezuela que adquiere el obrero norteamericano en Estados Unidos. O sea, que el obrero venezolano podría pedir un aumento de Bs. 34 diarios y los trabajadores sólo solicitan un aumento estimado en Bs. 13,85 diarios. El Decreto del Gobierno, en cambio, solamente ha



bulosa suma de cuatro mil millones apreciada por las empresas. Para impresionar a la opinión nacional, las compañías tuvieron la audacia de aumentar artificialmente aquella cantidad diez veces, colocando a los trabajadores en una posición ostensiblemente exagerada en sus peticiones.

Las compañías también alegaron que el costo para ellas por cada trabajador y en día efectivo de trabajo, fué de Bs. 51,50 y que con los aumentos pedidos este costo se elevaría a Bs. 250 por trabajador y día trabajado. Estas afirmaciones, son fácilmente rebatibles. De las propias cifras dadas por las empresas en 1948 podemos ver que el costo por trabajador y por día fué de Bs. 31,40. Por otra parte, el aumento total pedido por nosotros representa solamente para las compañías un desembolso adicional de Bs. 13,85 por trabajador y por día. De manera que el costo total efectivo, incluido el aumento consagrado en el contrato redactado por el Comité, por trabajador y por día, sería de Bs. 45,81 mientras que las compañías alegaban que era de Bs. 250. En este caso siguieron el sistema de multiplicar por cinco la cifra real. El representante de las propias compañías petroleras ante el Consejo Nacional de Economía y la Comisión de Política Minera y Petrolera, señor Xavier Lope Bello, afirmó en septiembre de 1949 que el costo total (promedio) por trabajador y día de labor era de Bs. 42,49 y no de Bs. 51,50 como alegaron las empresas en su remitido.

Por otra parte, las crecidas ganancias de las compañías les permitían holgadamente satisfacer nuestras aspiraciones. El cuadro contentivo de dichas ganancias obtenidas por las empresas en relación con cada uno de sus trabajadores —y el cual copiamos de seguidas— nos demuestra la razón de las reivindicaciones del proyecto de contrato único:

GANANCIAS NETAS ANUALES DE LAS COMPAÑIAS PETROLERAS  
POR CADA TRABAJADOR

Años	Promedio de ganancias por cada trabajador (en bolívares)
1943	8.681,51
1944	14.510,50
1945	12.174,92
1946	13.683,62
1947	15.891,16
1948	22.310,05

Este cuadro nos muestra que, pese a todos los aumentos que han logrado los trabajadores en los últimos años, las utilidades de las empresas son cada día mayores, sobre manera durante 1949 y 1950, cuando la producción ha llegado a 1.650.000 barriles diarios y cuando la venta de petróleo y sus derivados ha aumentado en los mercados de ultramar. Durante los seis años del cuadro anterior, las 12 empresas petroleras que operan en Venezuela se repartieron utilidades en dividendos por un monto de 1.487 millones de bolívares y aumentaron sus inversiones, extraídas también de sus utilidades en 1.859 millones de bolívares, o sea, que se repartieron 3.347 millones de bolívares.

Por todas estas razones, creemos que los salarios y sueldos de los obreros y empleados del petróleo han debido ser aumentados sobre las bases consagradas en el proyecto de contrato presentado por el Comité.

Approved For Release 2002/01/18 : CIA-RDP83-00415R

aumentado de Bs. 2 a 3 a los obreros de la nómina diaria y el 10% para los empleados de la nómina mensual.

En relación con la estabilidad en el trabajo, nada dice el Decreto del Gobierno, a pesar de que es un hecho sabido y notorio que las empresas despidieron, durante la vigencia del contrato anterior, más de veinte mil trabajadores, que no fueron reenganchados posteriormente, a pesar de la evidente prosperidad de la industria. Si la cláusula de estabilidad hubiera sido acogida el país no sólo aseguraría empleo a un número determinado de personas, sino que lograría estabilidad en la producción, lo cual haría que el volumen de las divisas permaneciese estable, o, al menos, fuera del alcance de bruscos altibajos, como sucede actualmente. La estabilidad del personal en la industria petrolera y la estabilidad con el escalafón de ascensos, no son reivindicaciones de los trabajadores petroleros, sino de toda la nación venezolana. Por la estabilidad se resguarda a la nación, no sólo contra las perturbaciones sociales y económicas que provocan los despidos en masa, sino que garantiza un evidente progreso en la labor de lograr una menor dependencia económica de la República con naciones extranjeras. De igual importancia nos parece el escalafón, desechado por el Decreto Ejecutivo, y sin el cual resulta completamente imposible el poder contar en el futuro con un personal profesionalizado, técnicamente capaz de realizar la exploración, explotación y distribución del petróleo y de sus subproductos.

Igualmente el Decreto Oficial nada nuevo dijo sobre la utilización de los Contratistas en los Campamentos Petroleros permitiendo que subsista la dramática situación caracterizada por la existencia de Compañías fantasmas que contratan a los obreros y a los empleados para negarles después el pago de salarios justos y el reconocimiento de sus prestaciones sociales. El Decreto se remite más o menos al texto legal, que como sabemos, resulta bastante ambiguo y general, permitiéndole a las Compañías eludir el cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales.

Así mismo calló la Institución del Salario Familiar, sentida aspiración, que por primera vez en Venezuela hubieran permitido atender al trabajador, no sólo como individuo, sino como célula familiar creadora de la nacionalidad.

Acerca del término del Decreto, el Comité considera que el plazo de treinta meses es nocivo a los intereses de los trabajadores. En esa forma congelarán los salarios, siendo como son las perspectivas mundiales de un alza continua del costo de vida. Los Trabajadores se habían acogido al plazo de un año, consagrado en la Ley para los Contratos por tiempo determinado. Pero, esta vez, como durante las discusiones celebradas en 1948, se aceptaron las razones y conveniencias de las empresas y no los justos reclamos de los trabajadores.

En definitiva, las tímidas y precarias mejoras consagradas en el Decreto del Ejecutivo Federal no responden a las aspiraciones de los trabajadores petroleros, ni mejoran su suerte de manera satisfactoria, pues mantienen la subsistencia de condiciones más o menos iguales a las que privaban durante la vigencia del Contrato extinguido este año.

Finalmente, considera este Comité propicia la oportunidad para requerir una vez más del Gobierno la libertad de organización y de lucha sindicales, sin la cual no podrán los trabajadores convertir en realidad sus aspiraciones de mejoramiento social y económico; en este sentido los integrantes de este Comité ratificamos a los traba-

Trabajadores de la industria del petróleo y a pueblo en general nuestra firme decisión de continuar laborando tenazmente por las justas y legítimas aspiraciones de los trabajadores petroleros de Venezuela. Así mismo, hacemos un llamado a todos los trabajadores a fin de que se sostengan en su puesto de lucha, firmes y unidos, como única fórmula que garantizará su bienestar y su victoria.

**EL COMITE DE TRABAJADORES PETROLEROS PRO-CONTRATO UNICO**

**Por el COMITE PRO - FEDERACION DE TRABAJADORES  
ORGANIZADOS DE VENEZUELA  
(COIETROV)**

**Elio Aponte González**

**Dagoberto Gonzalez A.**

**Por los SINDICATOS PETROLEROS DE PTO. LA CRUZ Y SAN JOAQUIN**

**Rodolfo Quintero**

**Martín Marval**

**Por el COMITE INDEPEDIENTE SINDICAL PETROLERO NACIONAL  
(CISPEN)**

**Roberto Viloria**

**Luis Hernández**

**Por el COMITE DE TRABAJADORES PETROLEROS DEL DTO. FEDERAL**

**Pedro Salazar**

**Horacio Colina**

**Por GRUPOS DE TRABAJADORES NO SINDICALIZADOS DE ZULIA,  
FALCON Y ANZOATEGUI**

**César Millán**

**Pedro Ortega Díaz**

**Por el COMITE SINDICAL NACIONAL PRO-CONTRATO PETROLERO  
(COSIPETROL)**

**Hugo Soto Socorro**

**Pedro Torrez hijo**

**COMPAÑERO, ESTE MANIFIESTO TIENE QUE SER LEIDO  
POR TODOS. HAZLO CIRCULAR!!!**

**Lib. y Tip. "La Torre" 30,000 ejemplares.**

# • Manifiesto •

El Partido Comunista de Venezuela denuncia y condena ante la opinión pública la cobarde maniobra de la dictadura militar, que ha puesto una vez más de manifiesto su sometimiento incondicional al imperialismo anglo-yanqui y su odio a los trabajadores venezolanos. El decreto del 9 de Abril es producto de ese sometimiento y ese odio, es producto de los compromisos contraídos por la dictadura militar con los imperialistas guerreristas que cojuzgan nuestra patria, en la recién finalizada Conferencia de Cancelleros Americanos.-

Como denunciemos hace ya tiempo, el gobierno había maquinado y convenido con los imperialistas que explotan nuestro petróleo, el sacrificio de los trabajadores venezolanos por medio del Decreto-prórroga que mantiene las condiciones de trabajo hasta ahora existentes en la industria petrolera, alargando la duración del contrato anterior y agregándole un mísero aumento de salario y algunas nimiedades que no satisfacen ni con mucho las justas peticiones de los trabajadores.-

Expreso se dejó fuera la mayor de las aspiraciones de los trabajadores petroleros: la estabilidad en el trabajo. Ahora las compañías petroleras continuará teniendo mano libre para despedir a millares de padres de familia, creando la incertidumbre y la miseria en los hogares obreros. Nuevamente se pondrá en marcha el "Walan Proudfit" para la reducción de los costos de producción, rebajando los salarios de los trabajadores, disminuyendo sus prestaciones, obligándolos a realizar varias tareas por un solo salario y, en fin, poniendo por norma cuantos artificios y recursos legales ha aprendido el imperialismo en su desenfrenado afán de explotación y para sacar hasta la última gota de sudor a los trabajadores petroleros, para enriquecer a la élite petrolera de la mayor riqueza de este país. Quieren convertir la industria petrolera venezolana en alimento de la maquinaria de guerra yanqui, para asesinar pueblo y dominar el mundo, en su desahogado ambición de explotar y enriquecerse a costa de la miseria, el sudor y la sangre de la clase obrera.

Pero cada día se hace más difícil a los guerreristas yanquis el cumplimiento de su desesperado deseo de dominación mundial. Los pueblos del mundo entero se alzan contra una nueva carnicería y para liberarse del yugo imperialista. También en Venezuela la clase obrera y el pueblo en general puede y debe luchar contra el imperialismo, cuya voluntad de extracción y dominio ha sido expresada en el Decreto-prórroga.

El Partido Comunista de Venezuela hace un ferviente llamado a la clase obrera y al pueblo venezolano para la lucha unida y sistemática contra el Decreto-prórroga de la dictadura; es necesario que todo el pueblo venezolano, por medio de acciones masivas e individuales, haga saber a los servidores del imperialismo, quienes cumplen lacayamente su triste papel, que la clase obrera, unida y firme en su combate, tomará cuenta definitiva de todos estos crímenes y traiciones.

El Partido Comunista de Venezuela llama a luchar a todos los trabajadores, desde las filas de sus sindicatos, unificada y ardorosamente, contra la medida reaccionaria y entreguista del gobierno, que puso fin a las discusiones de los trabajadores petroleros, imponiéndoles un contrato esclavista, que los ata al carro de la explotación del imperialismo. Este funesto proceder del gobierno militar, evidencia que el libre derecho de contratación ha sido cercenado en nuestro país y por consiguiente en lo futuro todos los problemas de los trabajadores van a correr la misma suerte.

Nuestro Partido está seguro de que los trabajadores sabrán frustrar todas estas maniobras y mantener muy en alto su bandera de lucha por la conquista de libertades Sindicales, por el derecho a organizarse libremente, por la libertad de los presos políticos, por un primer de llave unido y combativo, por la restitución total de garantías, contra las resoluciones de la Conferencia de Cancelleros, por la Paz y contra la guerra. (Comité Regional del PCV, Distrito Federal)

**Next 16 Page(s) In Document Exempt**

CONFIDENTIAL

Venezuela

FDD Abstract of [REDACTED]

25X1A

1. Manifesto of the Oil Workers to the People of Venezuela (8 pp; Spanish; no date).
2. Typewritten draft (16 pp; Spanish; no date).
3. Manifesto (1 p; Spanish; no date).

25X1X

1. This document, said to have been distributed in Caracas on 20 April 1951, attacks the decree dictated by the Federal Executive on 9 April 1951, which put an end to the discussions concerning a new collective labor contract in the oil industry. The economic argument is similar to that presented in Document No 2. The manifesto is signed by representatives of 6 groups participating in the Committee of Oil Workers for a Single Contract.

2. This document, [REDACTED] member of the PCV, presents a refutation of the so-called "Memorandum No 1", which the oil companies published in Caracas newspapers on 28 March 1951 in connection with the discussions for a new contract. The companies are accused of grossly exaggerating the additional costs to them of meeting the workers' demands for increased wages, and of falsifying the figures on their own profits. It is further maintained that in terms of purchasing power the oil workers are grossly underpaid in comparison with those in the US. The importance of a job-security clause in the contract is stressed, from the point of view not only of the workers but of the general economy of the country. It is claimed that the oil companies are impoverishing the country for their own profit; Venezuela is consequently becoming more and more dependent upon imports for its existence. The companies are said to be violating the Labor Law in demanding a contract for a period longer than one year; the workers do not want their wages frozen during a period of inflation. The groups of workers who have united to discuss a new contract have done so regardless of their political ideologies or religious beliefs. They are defending the national sovereignty and independence of Venezuela.

3. This document, signed by the Regional Committee of the PCV, Federal District, and said to have been circulated in Caracas on 17 April 1951, denounces the governmental decree of 9 April, which is interpreted as a sign of unconditional surrender to Anglo-Yankee imperialism. The Communist Party calls on all Venezuelans to fight against this decree.

25X1A

5 Jun 51

CONFIDENTIAL

RETURN TO CIA LIBRARY